

## SEÑALES CONFUSAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO ASEGURAN LA AYUDA A SOMOZA

Desde el principio de la presidencia de Carter, la historia legislativa de la supresión de la ayuda militar a los violadores de los derechos humanos en el hemisferio ha sido confusa y tortuosa. Las divisiones internas y las inconsistencias del Departamento de Estado —organismo que tiene la responsabilidad principal en la implementación de la política de Carter sobre los derechos humanos— han exacerbado este proceso. Así, las indicaciones que la rama ejecutiva ha dado al Congreso con respecto a la política con países específicos son oscuras en el mejor de los casos, y contradictorias en el peor. Ante esta diversidad de señales del Departamento de Estado, incluso a un Congreso deseoso de cooperar le resulta difícil saber cómo expresar su apoyo a la postura sobre los derechos humanos de la nueva Administración. Que el Congreso suprima esas ayudas, ¿será un signo de enfrentamiento o una demostración de apoyo a la Administración?

Un caso significativo al respecto ha sido el proceso seguido en la determinación de la Cámara de retirar la ayuda militar a Nicaragua en vista de sus probadas violaciones a los derechos humanos. El proceso empezó cuando el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara sobre Operaciones Extranjeras tuvo amplias audiencias sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en Abril de 1977. Se trataba de determinar si esas violaciones justificaban un corte de 3.1 millones de dólares en los créditos a las ventas militares extranjeras y en fondos para entrenamiento otorgados a Nicaragua. Charles Bray, entonces Diputado Secretario Asistente de Estado para Asuntos Interamericanos, prestó testimonio ante el Subcomité diciendo: “La Guardia Nacional de Nicaragua ha utilizado tácticas brutales y, a veces, cruelmente represivas para mantener el orden interno” (5 de Abril de 1977).

En los meses anteriores a este debate de apropiación, el congresista Koch, miembro de ese Subcomité, había presentado un claro alegato en apoyo a tal supresión. Además del testimonio básico del Congreso en favor del corte, el principal documento que Koch usó como prueba era la carta pastoral publicada por los Obispos católicos de Nicaragua, generalmente conservadores, denunciando torturas, violaciones y ejecuciones sumarias de civiles por fuerzas del Gobierno. El asunto estaba tan bien documentado y era tan convincente que el Congresista Obey, miembro del Subcomité y que se había opuesto a cualquier corte a países específicos debido a los derechos humanos en apoyo a las iniciativas del Presidente, apoyó activamente la enmienda del Congresista Koch. En palabras de Obey: “En un área donde no tenemos intereses de seguridad, en un área donde podamos mostrar sin sombra de dudas que nos referimos a un país que no ofrece esperanzas de cambiar su comportamiento respecto a los derechos humanos, debemos hacer una excepción”. El Subcomité de Operaciones Extranjeras votó a favor de la enmienda de Koch, retirando la ayuda militar a Nicaragua.

El 15 de Junio, en la reunión plenaria del Comité de Apropiaciones sobre la Ley de Asistencia Extranjera, el congresista Cederberg introdujo una enmienda para restablecer la ayuda militar a Nicaragua. El Comité votó 22 a 21 en favor de mantener la prohibición. Así, la ley salió del Comité conteniendo la retirada de ayuda a Nicaragua. En el momento en que votó el pleno del comité, era ya evidente que un cabildeo (“lobby”) organizado y pagado por el Gobierno nicaragüense estaba trabajando intensamente para restablecer la ayuda militar a Nicaragua. De acuerdo a informaciones periodísticas y a fuentes gubernamentales, este cabildeo incluía a



William Cramer, actualmente consejero general del Comité Nacional Republicano. "La firma legal de Cramer en Washington se inscribió como agente extranjero para el Gobierno de Nicaragua la semana pasada, y dijo que espera recibir \$ 50,000 dólares como pago a los gastos por el cabildeo" para restaurar la ayuda militar a Nicaragua (*Tampa Times*, 19 de Junio). En la actualidad, los abogados del Departamento de Justicia están investigando la situación de Cramer como agente extranjero. "La investigación trata de determinar, entre otras cosas, si Cramer empezó su cabildeo para el mantenimiento de la ayuda militar a Nicaragua más de diez días antes de inscribirse como agente extranjero para ese país" (*Tampa Times*, 20 de Junio). Además, por lo menos durante los seis últimos meses de 1976, Somoza contrató una firma de relaciones públicas de Nueva York, la Mackenzie McCheyne Inc., para mejorar la imagen del país. La firma creó un Servicio de Información del Gobierno de Nicaragua en Washington, que difunde comunicados de prensa y cartas en apoyo al Gobierno.

Tras el voto en el Comité de Apropiaciones, el 23 de Junio el congresista Charles Wilson, demócrata y miembro del Comité de Operaciones Extranjeras, introdujo en la Cámara una enmienda para restaurar la ayuda militar a Nicaragua.

De nuevo el congresista Obey, lo mismo que otros, manifestó su apoyo a una supresión de la ayuda militar a Nicaragua. Numerosos congresistas, en su mayoría republicanos, defendieron la enmienda del congresista Wilson para restablecer la ayuda. Muchos de ellos acababan de volver de Nicaragua y manifestaron que no habían visto evidencia alguna de violaciones a los derechos humanos en ese país. Hubo una votación abierta y la Cámara votó por 225 votos contra 180 por el restablecimiento de 3.1 millones de dólares en ayuda militar a Nicaragua.

¿Por qué el pleno de la Cámara rechazó la propuesta del comité de suprimir la ayuda militar a Nicaragua? Aunque hubo muchos factores, incluyendo la máquina de cabildeo de Somoza, un elemento clave fue la postura vacilante del Departamento de Estado con respecto a este voto del Comité sobre la supresión de ayuda militar. Como escribió el congresista Koch en su carta al Presidente Carter, "el Departamento de Estado ha cambiado de postura en numerosas ocasiones con respecto a asuntos básicos de Nicaragua".

Por ejemplo, en su carta al Presidente Carter, Koch cita la respuesta que la secretaria de Estado para Ayuda en Seguridad, Lucy Benson, dió a una pregunta del congresista Long, en su testimonio ante el Subcomité de Operaciones Extranjeras:

Congresista Long:

"¿Qué perderían los Estados Unidos y qué interés en la seguridad se vería afectado si este Comité suspendiese toda ayuda a Nicaragua en vista de algunas de las grandes violaciones a los derechos humanos en ese país?"

Secretaria Benson: "No se me ocurre absolutamente ninguno."

Las justificaciones presentadas en el memorial del Departamento de Estado titulado **Ayuda en seguridad para Nicaragua**, unido a la carta del Secretario de Estado Rodman, están en abierta contradicción con este juicio.

Respecto al voto en la Cámara, oficiales de relaciones con el Congreso del Departamento de Estado aseguraron verbalmente a la oficina de Koch en tres ocasiones diferentes que el Departamento de Estado no presionaría ("lobby") sobre este problema. Sin embargo, tras el voto en la Cámara, el congresista

ta Koch escribió en una carta al Presidente Carter: "Quiero que conozca un incidente en el que su Administración, tras asegurar verbalmente a mi oficina que no intervendría después de la negativa del Comité de Apropiaciones de ayudar militarmente a Nicaragua, cambió su posición para alinearse con el cabildo organizado por un Gobierno represivo" (1 de julio de 1977).

El Secretario Ayudante de Estado, Terence Todman, había escrito al congresista Long, Presidente del Subcomité de Operaciones Extranjeras, el 21 de Junio, la víspera del debate de Apropiaciones en la Cámara, presionándole para que restableciera la ayuda militar a Nicaragua. En un gesto poco ortodoxo, Todman envió copias de su carta a Long a tres fuertes defensores del régimen de Somoza, los congresistas John Murphy, Elford Cederberg y George O'Brien, pero no envió una copia de su carta al congresista Koch, patrocinador de la enmienda original.

El 29 de Junio, al calmarse la polvareda, el Secretario Ayudante para las relaciones con el Congreso, Douglas Bennet, escribió una carta al Presidente Long asegurándole que la postura del Departamento de Estado era la de no desembolsar la ayuda militar a Nicaragua hasta que no mejorase la situación de

los derechos humanos (como el testigo del Departamento de Estado, Charles Bray, había afirmado). Irónicamente, también menciona que el Gobierno de Nicaragua suprimió la nota de prensa del Departamento de Estado en la que se afirma que los acuerdos de asistencia en seguridad no se llevarían a cabo mientras no se cumplieran las condiciones de los derechos humanos. De acuerdo con fuentes informadas, una serie de oficiales del Departamento de Estado se oponían a la decisión de Todman de enviar una carta al Congresista Long y a quienes se oponían a cortar la ayuda militar con anterioridad al debate en la Cámara.

Al reseñar este proceso legislativo, pretendemos apuntar a las contradicciones y falta de un propósito claro en la política sobre los derechos humanos de la Administración de Carter. Este ejemplo muestra las dificultades que tienen los congresistas para adoptar decisiones basados en los derechos humanos, cuando la Administración misma no está segura de su propia política.

(Sacado de Update Latin American. May-Jun 1977. Editado por el Washington Office on Latin America).

